



Consejo Económico y Social

Distr. general
3 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

Comisión de Estupefacientes

55º período de sesiones

Viena, 12 a 16 de marzo de 2012

Tema 6 del programa provisional*

**Aplicación de la Declaración política y el Plan de Acción
sobre cooperación internacional en favor de una
estrategia integral y equilibrada para contrarrestar
el problema mundial de las drogas**

Medidas adoptadas por los Estados Miembros para aplicar la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas

Informe del Director Ejecutivo**

Resumen

El presente informe contiene información basada en la primera ronda de respuestas de los Estados Miembros al cuestionario (partes I y II) para los informes anuales en lo que respecta a las medidas adoptadas para aplicar la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito preparará un informe de este tipo cada dos años de conformidad con lo dispuesto en la resolución 53/16 de la Comisión de Estupefacientes, titulada “Racionalización del cuestionario para los informes anuales”. En el informe se examinan las medidas adoptadas por los Estados Miembros en lo que respecta a la reducción de la demanda y la oferta de drogas, la lucha contra el blanqueo de dinero y la promoción de la cooperación judicial y se formulan recomendaciones al respecto.

* E/CN.7/2012/1.

** El informe se presentó con retraso por motivos de procedimiento.



Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
II. Reducción de la demanda de drogas y medidas conexas	3
III. Reducción de la oferta de drogas y medidas conexas	14
IV. Lucha contra el blanqueo de dinero y promoción de la cooperación judicial para fortalecer la cooperación internacional	20
V. Recomendaciones	23

I. Introducción

1. El presente informe contiene un análisis de las respuestas proporcionadas por los Estados Miembros a las partes I y II del cuestionario para los informes anuales¹, aprobado por la Comisión de Estupefacientes en su resolución 53/16, titulada “Racionalización del cuestionario para los informes anuales”. En esa resolución, la Comisión solicitó al Director Ejecutivo que le preparara y presentara cada dos años, y sobre la base de las respuestas proporcionadas por los Estados Miembros al cuestionario, un informe único sobre las medidas adoptadas para aplicar la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, aprobados por la Comisión en la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de sesiones y por la Asamblea General en su resolución 64/182, el primero de los cuales debería examinar la Comisión en su 55º período de sesiones, en 2012.

2. Para noviembre de 2011 se había recibido un total de 74 respuestas al cuestionario para los informes anuales. En el presente informe sobre la aplicación de la Declaración política y el Plan de Acción se hace un resumen de la información proporcionada por los Estados Miembros en sus respuestas. En los próximos informes bienales se hará un análisis más detallado, incluso de las novedades pertinentes que se hayan ido produciendo.

II. Reducción de la demanda de drogas y medidas conexas

Estrategia en materia de drogas y recursos para el tratamiento y la prevención

3. La mayoría de los Estados Miembros que presentaron información indicaron que habían adoptado una estrategia nacional en materia de drogas consignada por escrito que incluía un componente de reducción de la demanda. Las estrategias se estaban aplicando y tenían un período medio de cobertura de entre tres y siete años. Según la información recibida, la mayoría de ellas incluían servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, servicios de prevención de las consecuencias sanitarias y sociales del consumo de drogas y actividades de vigilancia del consumo de drogas e investigación a ese respecto. La mayoría de los Estados Miembros que presentaron información contaban con una entidad coordinadora central para aplicar el componente de reducción de la demanda de drogas de la estrategia. Más del 85% de las respuestas indicaban que los ministerios de salud, asuntos sociales, educación, seguridad y justicia estaban representados en la entidad coordinadora central. Entre las tres cuartas y las dos terceras partes de las respuestas indicaron que las organizaciones no gubernamentales, los ministerios de trabajo y empleo y el sector privado estaban representados en la entidad coordinadora central.

¹ Parte I. Marco legislativo e institucional (E/NR/2010/1) y Parte II. Enfoque amplio de la reducción de la demanda y la oferta de drogas (E/NR/2010/2).

4. Una de cada tres estrategias nacionales de reducción de la demanda seguía sin recibir financiación. La situación era particularmente grave en África, donde ninguna de las estrategias existentes contaba con financiación. La falta de financiación también era un problema para una tercera parte o más de las estrategias en los países de América Latina y el Caribe, Asia central, meridional y occidental, Europa central y occidental y Europa oriental y sudoriental. Casi uno de cada tres de los Estados Miembros que tenían recursos presupuestarios previstos para sus estrategias informaron de que el presupuesto destinado al tratamiento y la prevención había disminuido con respecto a 2010. La situación era particularmente grave en Europa central y occidental y en África del Norte y Oriente Medio, donde más del 40% de los países informaron de que había disminuido el presupuesto destinado a programas de tratamiento. Un porcentaje similar de los países europeos que presentaron información indicaron que había disminuido el presupuesto destinado a programas de prevención.

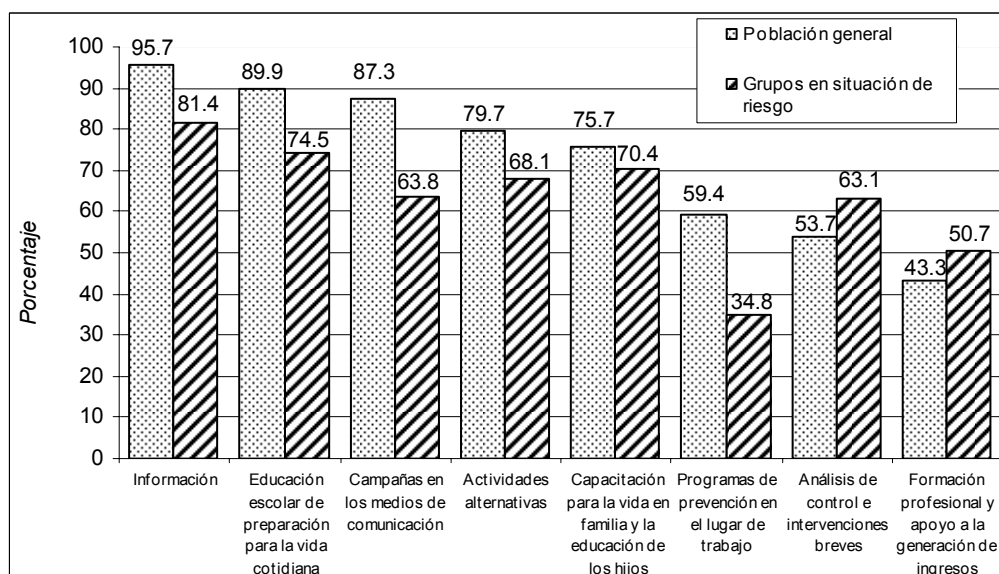
Prevención e intervención precoz

5. En lo que respecta a la prevención, se invitó a los Estados Miembros a que informaran sobre la realización de las siguientes actividades de prevención durante el año que se examinaba: difusión de información sobre los peligros de las drogas; educación escolar basada en la preparación para la vida cotidiana; capacitación en aptitudes para la vida en familia y la educación de los hijos; programas de prevención en el lugar de trabajo; actividades alternativas (deportes, teatro, música, etc.); formación profesional y apoyo a la generación de ingresos; campañas en los medios de comunicación; y análisis de control e intervenciones breves. En el presente informe no se analizan la calidad y el contenido de las intervenciones, dado que no se incluyeron preguntas al respecto en el cuestionario, pero sería útil disponer de tal información para saber claramente si los recursos se han invertido de la manera más eficiente posible. Los datos presentados por los Estados Miembros proporcionan una idea general de la labor de prevención que han realizado.

En el gráfico I figura el porcentaje de Estados Miembros que informaron de la realización de las diversas actividades de prevención, tanto entre la población general como entre los grupos en situación de riesgo (por orden decreciente de prevalencia entre la población general).

Gráfico I

Aplicación por los Estados Miembros de diversas actividades de prevención, entre la población general y los grupos en situación de riesgo
(N=74)



6. La pauta es la misma en ambos grupos destinatarios, con una tendencia general a que haya menos actividades dirigidas a los grupos en situación de riesgo. El intervalo entre los porcentajes correspondientes a las actividades de prevención más habituales y a las menos habituales notificadas por los Estados Miembros se situó entre el 43,3% y el 95,7% para la población general, mientras que para los grupos en situación de riesgo osciló entre el 34,8% y el 81,4%.

7. Pese a las grandes lagunas que quedan por subsanar, se trata de una señal prometedora a nivel mundial. Es particularmente alentador que se informara de la realización a gran escala de dos intervenciones sobre cuya eficacia y eficiencia existe un amplio conjunto de pruebas, a saber, la educación escolar basada en la preparación para la vida cotidiana y la capacitación en aptitudes para la vida en familia y la educación de los hijos. No obstante, solo aproximadamente la mitad de los Estados Miembros que presentaron información habían puesto en práctica otras dos intervenciones que también se basan en datos científicos sólidos (los programas de prevención en el lugar de trabajo y los análisis de control e intervenciones breves).

8. Por el contrario, las respuestas indicaron que la difusión de información sobre las drogas siguió siendo la actividad más frecuentemente utilizada para la reducción de la demanda, pese a la falta de pruebas acerca de su eficacia. Los resultados de las campañas en los medios de comunicación, las actividades alternativas y la formación profesional y el apoyo a la generación de ingresos eran menos homogéneos. Las dos primeras actividades se utilizaban bastante ampliamente —por más de las dos terceras partes de los Estados Miembros que presentaron información— mientras que el tercer tipo de intervención fue el que menos se utilizó.

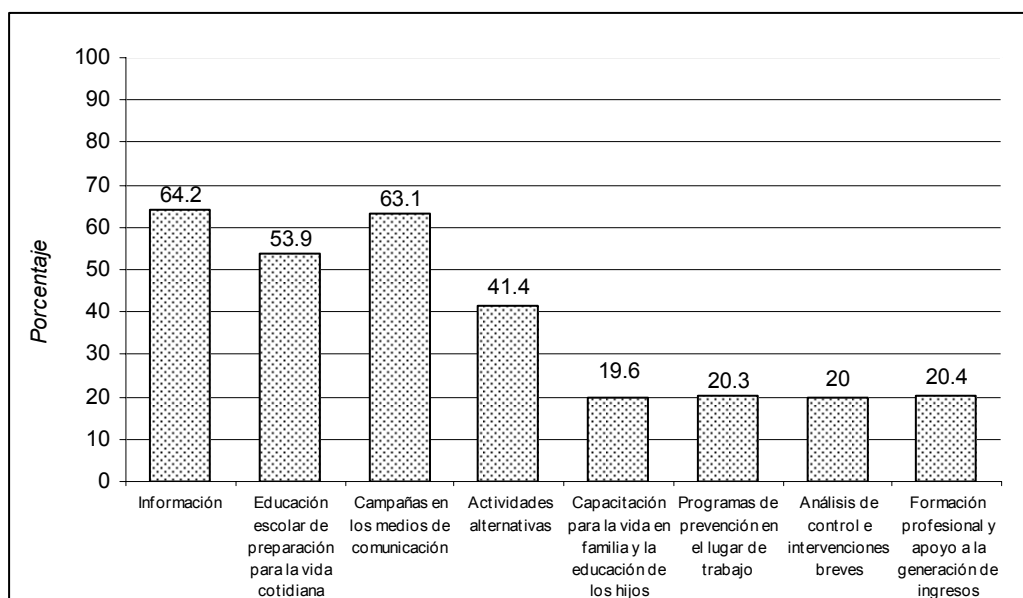
9. Las diferencias en cuanto a la frecuencia de uso de las distintas actividades de prevención que se ofrecían a la población general resultaban más evidentes al analizar los datos de los países de África. Las respuestas de los países de África subsahariana indicaron que las tres actividades de prevención principales fueron la difusión de información sobre las drogas (87%), las campañas en los medios de comunicación (86%) y la educación sobre las drogas basada en la preparación para la vida cotidiana (67%). Sin embargo, solo el 50% de esos países informó de actividades alternativas, el 33% informó de programas de capacitación en aptitudes para la vida en familia y la educación de los hijos y programas de prevención en el lugar de trabajo, el 16% indicó que utilizaba análisis de control o intervenciones breves y ninguno dijo utilizar la formación profesional.

10. Aunque el nivel de ejecución de las actividades de prevención fue alentador, los niveles de cobertura notificados por los países fueron más problemáticos. Como se observa en el gráfico II, solo dos de las ocho actividades evaluadas tenían una cobertura alta en el 60% o más de los países (concretamente, la información sobre las drogas y las campañas en los medios de comunicación). En lo que respecta a los programas con una base más empírica la situación no era tan positiva, pues poco más del 50% de los Estados Miembros comunicaron niveles altos de cobertura de la educación escolar basada en la preparación para la vida cotidiana y solo aproximadamente el 20% dijo tener una alta cobertura de los programas de prevención en el lugar de trabajo, los análisis de control e intervenciones breves y la capacitación en aptitudes para la vida en familia y la educación de los hijos.

Gráfico II

Nivel de cobertura de diversas actividades de prevención aplicadas por los Estados Miembros

(N=74)



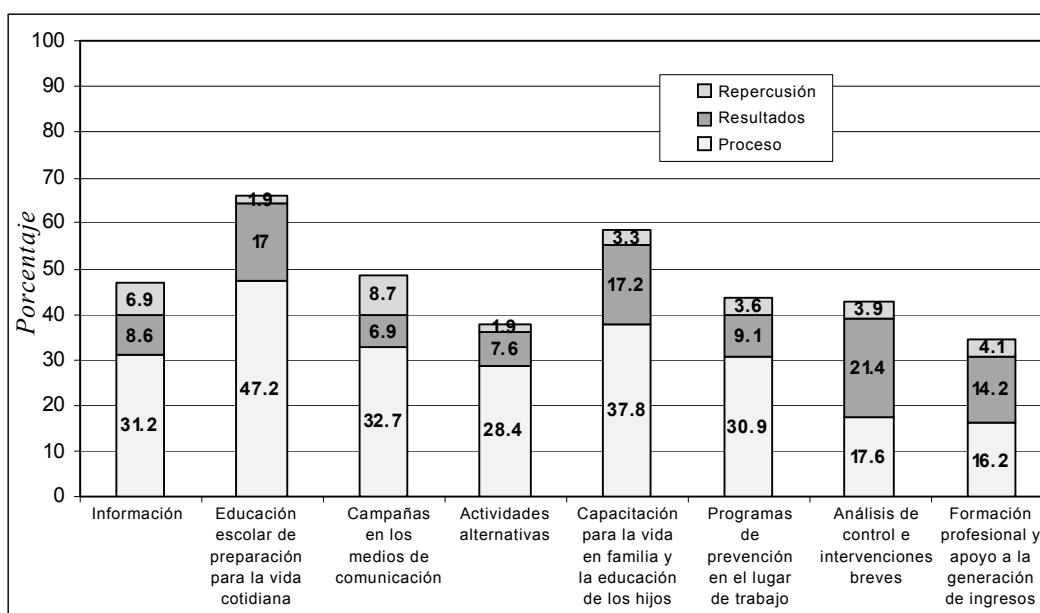
11. El gráfico III muestra el porcentaje de Estados Miembros que dijeron haber evaluado diversas actividades de prevención. Los programas de prevención de base empírica, como la educación escolar basada en la preparación para la vida cotidiana

y la capacitación en aptitudes para la vida en familia y la educación de los hijos, fueron evaluados en la mayoría de los Estados Miembros que presentaron información (el 66,1% y el 58,5%, respectivamente), pero otras actividades de prevención fueron evaluadas en muy pocos casos. Además, lo que es más importante, la mayoría de las veces la evaluación se centró en el proceso y no en la repercusión o los resultados de la actividad.

Gráfico III

Evaluación de las actividades de prevención por los Estados Miembros

(N=74)

**Tratamiento**

12. En lo que respecta al tratamiento se solicitó a los Estados Miembros que informaran acerca de determinadas características básicas de sus sistemas de tratamiento. Concretamente, se les preguntó si el sistema de tratamiento se basaba más en servicios ambulatorios o en servicios residenciales, si era un sistema voluntario y si se permitía utilizar como medida sustitutiva de las sanciones penales. Además, los Estados Miembros explicaron con qué servicios de tratamiento y atención de la drogodependencia contaban tanto en la comunidad como en las instituciones penitenciarias e indicaron los niveles de cobertura de cada uno de los servicios con que contaban.

13. La mayoría de los Estados Miembros informaron de que disponían de servicios de tratamiento de la drogodependencia tanto de tipo ambulatorio como de tipo residencial. A nivel mundial, el 25% de las unidades de tratamiento de la drogodependencia eran residenciales, mientras que el 75% eran para pacientes ambulatorios. No obstante, esta distribución variaba enormemente entre las distintas zonas geográficas estudiadas: en África, América y Asia más del 50% de las unidades de tratamiento de la drogodependencia atendían a pacientes ingresados; las

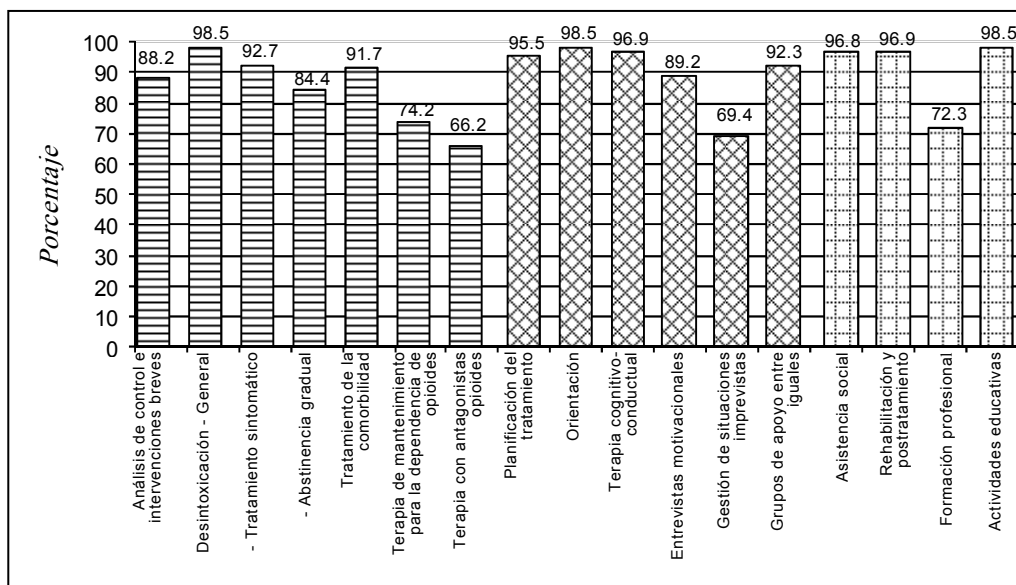
unidades ambulatorias representaban solo el 27% de las plazas disponibles para el tratamiento de drogodependientes en los Estados Miembros que presentaron información del continente americano y solo el 4% en los Estados de África.

14. Como indica el gráfico IV, un mayor número de países comunicaron que contaban con servicios de tratamiento y atención de drogodependientes en la comunidad que los que dijeron que realizaban actividades de prevención. Más del 65% de los Estados Miembros afirmaron que prestaban los 17 servicios a que se refería la encuesta. Los servicios enumerados en el gráfico IV se han codificado por colores para distinguir entre el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicosocial y la prevención, el tratamiento y la atención de la infección por el VIH/SIDA relacionado con el consumo de drogas y otras enfermedades. Una secuencia continua de servicios de atención orientados a la recuperación incluiría e integraría a todos los servicios enumerados en el cuestionario. Entre los servicios que menos se prestaban (por debajo del 75%) figuraban el tratamiento con agonistas y antagonistas opioides de acción prolongada para las personas adictas a los opiáceos y la gestión de situaciones imprevistas, una terapia psicosocial específica, así como la formación profesional. Aunque los datos sobre el tratamiento de personas adictas a los opiáceos con agonistas y antagonistas opioides de acción prolongada puedan parecer preocupantes, deben analizarse teniendo en cuenta que la dependencia de opiáceos no es un problema nacional importante en todos los países.

Gráfico IV

Prestación por los Estados Miembros de diversos servicios de tratamiento y atención de la drogodependencia en la comunidad

(N=74)



15. Los servicios que se prestaban en las instituciones penitenciarias eran mucho más escasos que los que se ofrecían en la comunidad en todo tipo de intervenciones (gráfico V). Además, como en el caso de las intervenciones de prevención de la drogodependencia, aunque la frecuencia de las distintas intervenciones era alentadora (véanse los gráficos VI y VII *infra*), el número de países que informaron

de altas tasas de cobertura de dichos servicios fue menor a lo esperado, en particular en lo que respecta a las instituciones penitenciarias.

Gráfico V

Prestación por los Estados Miembros de diversos servicios de tratamiento y atención de la drogodependencia en instituciones penitenciarias
(N=74)

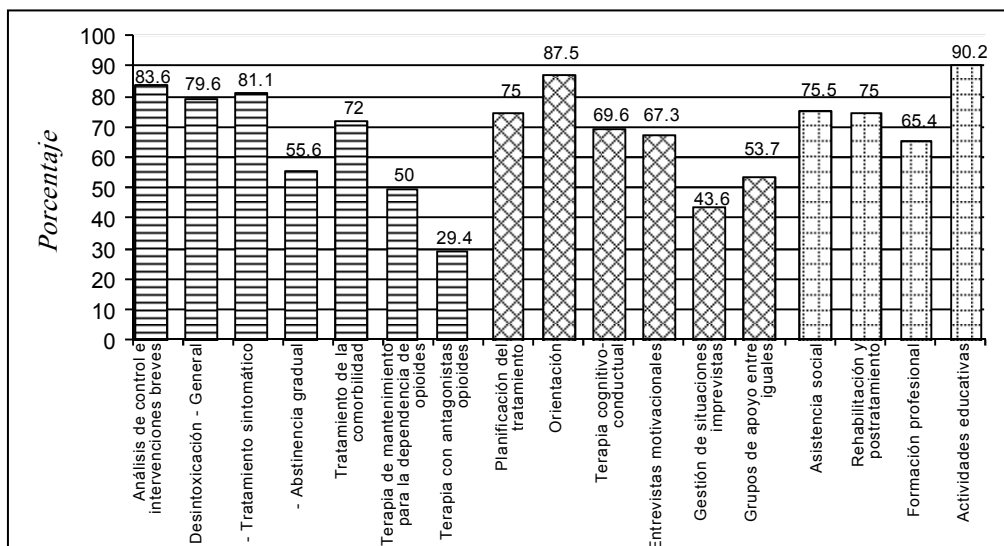


Gráfico VI

Nivel de cobertura de diversos servicios de tratamiento y atención de la drogodependencia prestados por los Estados Miembros en la comunidad
(N=74)

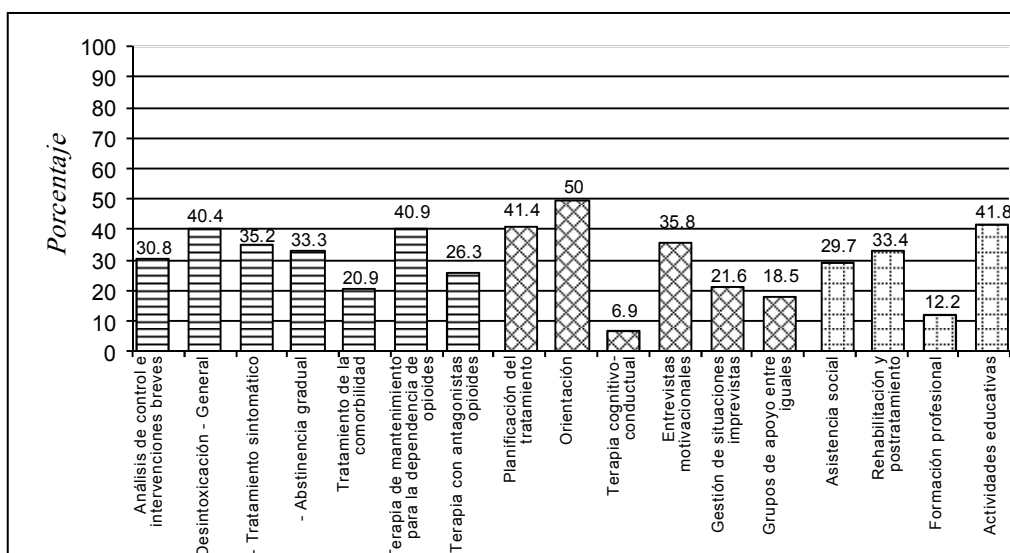
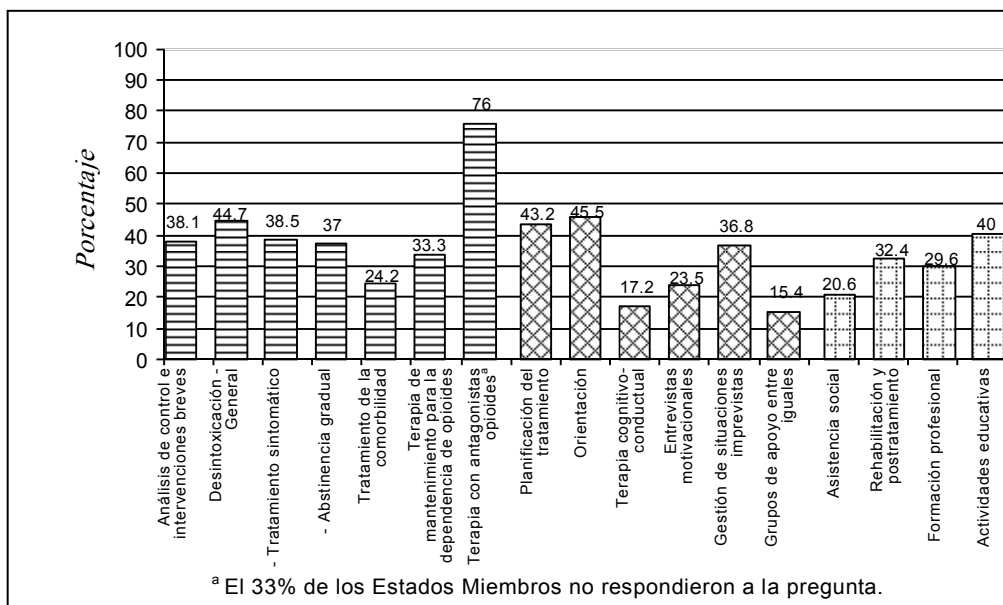


Gráfico VII
Nivel de cobertura de diversos servicios de tratamiento y atención de la drogodependencia prestados por los Estados Miembros en instituciones penitenciarias
 (N=74)



16. En el *Informe Mundial sobre las Drogas* de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se ofrece más información sobre la demanda de tratamiento de la drogodependencia y el acceso a dicho tratamiento a nivel mundial. Según el *Informe Mundial sobre las Drogas 2011*², en 2009 la cifra de personas que recibieron servicios de tratamiento y atención de la drogodependencia pudo alcanzar los 4,7 millones de personas. Se calcula que esa cifra representa entre el 12% y el 30% de las personas que hacen un uso indebido de drogas en todo el mundo. En cuanto a la demanda de tratamiento, la situación varía de una región a otra. El consumo de cannabis genera una parte importante de la demanda de tratamiento en la mayoría de las regiones, pero de forma especialmente prominente en África y Oceanía. Los opiáceos dominan la demanda de tratamiento en Asia y Europa, mientras que la cocaína es la droga que causa más problemas en América del Sur. En América del Norte, el cannabis, los opioides y la cocaína contribuyen casi por igual a la demanda total de tratamiento. Los estimulantes de tipo anfetamínico no predominan aún en ninguna región, pero contribuyen a una parte considerable de la demanda de tratamiento, sobre todo en Asia y Oceanía, aunque también en América del Norte y Europa. En los últimos años se ha observado un aumento continuo del uso problemático con fines no médicos de diversos opioides de venta con receta en muchas regiones del mundo, especialmente en América del Norte.

² Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.11.XI.10.

17. Pese a estas diferencias claras en cuanto a las sustancias que causan la mayor parte de la demanda de tratamiento de la drogodependencia, no está claro si en la mayoría de los países los servicios de tratamiento están realmente orientados a aliviar la situación del uso indebido de drogas. Por ejemplo, pese a la alta prevalencia del uso de estimulantes de tipo anfetamínico en Asia, especialmente en Asia oriental y sudoriental, la demanda no atendida de tratamiento de los usuarios de estimulantes de tipo anfetamínico en esas regiones sigue siendo motivo de preocupación. La mayoría de los servicios de tratamiento van dirigidos a los consumidores de opioides y cannabis, y por tanto los servicios de tratamiento destinados a los consumidores de estimulantes de tipo anfetamínico son relativamente escasos y no cuentan con suficiente financiación. Además, en Europa, prácticamente al igual que en América del Norte, solo una de cada cuatro o cinco personas que hacen un uso indebido de opioides recibe tratamiento.

18. Por último, casi el 30% de los Estados Miembros dijeron no contar con servicios de tratamiento de la drogodependencia dirigidos a delincuentes toxicómanos como alternativa a las sanciones penales. Este era el caso concretamente en Asia oriental y sudoriental y en África subsahariana, regiones en las que la disponibilidad de estos servicios era del 50% y del 75%, respectivamente.

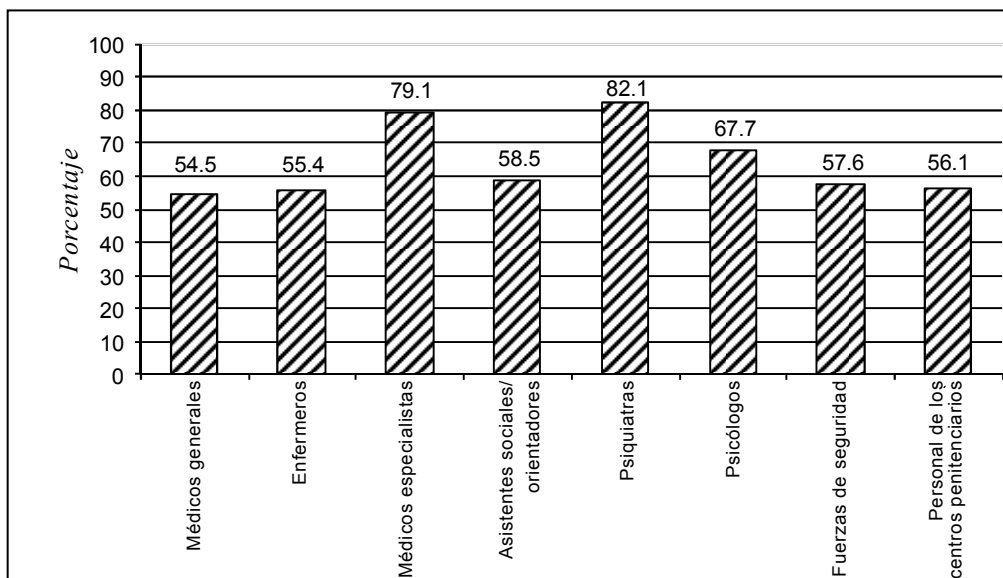
Normas de calidad y capacitación del personal

19. Como indica el gráfico VIII, la capacitación en materia de intervenciones de reducción de la demanda de drogas suele ir dirigida a psiquiatras y médicos especialistas, y es mucho menor el número de médicos generales, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos y miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones que reciben formación en esa esfera. La situación es particularmente grave en lo que respecta a las intervenciones eficaces para la prevención de la drogodependencia, las terapias psicosociales y los servicios sociales.

Gráfico VIII

Disponibilidad de capacitación para los profesionales en materia de intervenciones orientadas a la reducción de la demanda como parte de los programas de estudios conducentes a su titulación

(N=74)

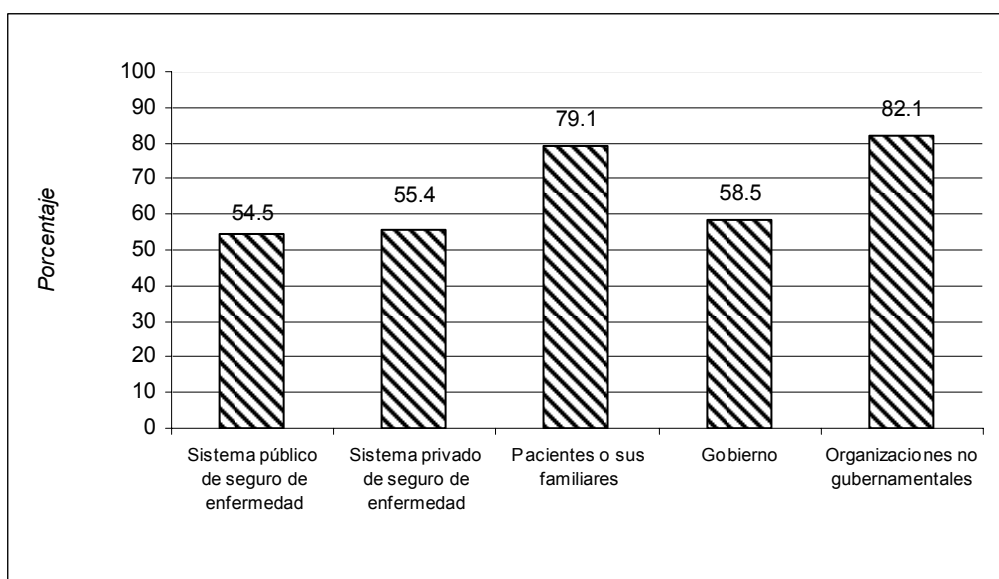


20. En lo que respecta a la accesibilidad de los servicios de tratamiento, es importante determinar a quién corresponde pagar el tratamiento de la drogodependencia. En ese contexto, preocupa que, según la información recibida, el tratamiento de la drogodependencia lo pague el paciente o su familia o las organizaciones de la sociedad civil con mucha más frecuencia que los sistemas de seguro de enfermedad (públicos o privados) o que el gobierno (véase el gráfico IX).

Gráfico IX

Pago del tratamiento de la drogodependencia

(N=74)



21. Durante el período objeto de examen los problemas principales en relación con los servicios de tratamiento tuvieron que ver, en primer lugar, con las restricciones financieras, seguidas de la mala calidad de la infraestructura y los suministros (edificios, equipo, medicamentos, etc.), la escasez de personal capacitado, un marco jurídico inadecuado y, por último, la mala coordinación entre los distintos sectores y la inadecuada vinculación con servicios de apoyo.

Prevención de enfermedades, contagiosas o no

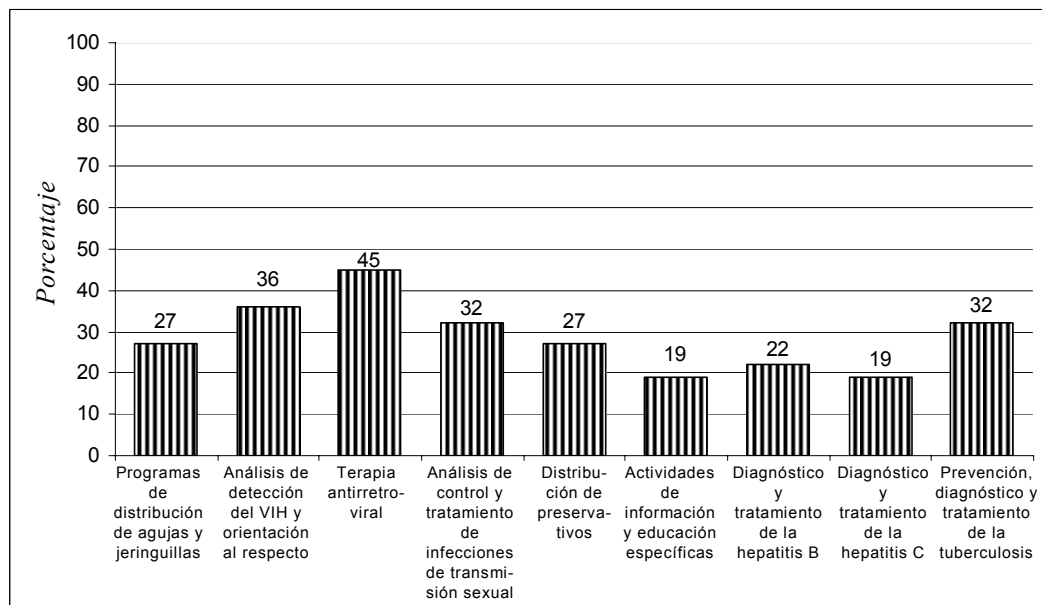
22. La información presentada sobre la disponibilidad de servicios para la prevención de enfermedades, contagiosas o no, fue muy insuficiente, y el porcentaje de países que no presentaron información al respecto osciló entre el 28% para algunos servicios y el 55% para otros.

23. En los pocos Estados Miembros que sí informaron sobre los diversos servicios, la cobertura de estos también fue muy baja. Como indica el gráfico X, solo entre el 19% y el 45% de los servicios tenían una cobertura alta, según la información recibida. Además, siete de cada nueve servicios tenían una cobertura alta en menos de una tercera parte de los países (gráfico X). La información sobre los servicios prestados en las instituciones penitenciarias fue aún más escasa, por lo que no se pudieron analizar los datos. Se puede obtener una idea más completa de las respuestas ofrecidas por los Estados Miembros para aliviar las consecuencias sanitarias y sociales del consumo de drogas, en particular el VIH/SIDA, la hepatitis C y la tuberculosis, en el informe del Director Ejecutivo sobre la situación mundial con respecto al uso indebido de drogas (E/CN.7/2012/2), que se basa en una amplia variedad de fuentes de datos e información.

Gráfico X

Nivel de cobertura de diversos servicios prestados por los Estados Miembros para la prevención, el tratamiento y la atención del VIH y otras enfermedades infecciosas entre los consumidores de drogas en la comunidad

(N=74)



III. Reducción de la oferta de drogas y medidas conexas

A nivel nacional

24. La mayoría de los Estados Miembros que respondieron al cuestionario indicaron que tenían una estrategia integrada consignada por escrito para reducir la oferta y la demanda de drogas. Muchos Estados también tenían una estrategia contra la delincuencia organizada, consignada por escrito y aprobada por el gobierno, con un componente específico relativo a la reducción de la oferta de drogas. Algunos Estados indicaron que estaban preparando estrategias de lucha contra la delincuencia organizada que incluirían medidas contra el tráfico de drogas.

25. La mayoría de los Estados Miembros indicaron que habían impulsado iniciativas resueltas de fiscalización y vigilancia de los estimulantes de tipo anfetamínico y las sustancias ilícitas mediante programas de erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas, la fiscalización y la vigilancia de precursores, el uso de inteligencia forense para el análisis de las incautaciones y para las investigaciones, la aplicación de legislación para combatir el blanqueo de dinero y la investigación y evaluación de las actividades de reducción de la oferta de drogas. Solo una minoría de Estados Miembros aplicaban programas de desarrollo alternativo.

26. Varios Estados Miembros indicaron que habían aprobado programas específicos para lograr la detención de los traficantes y distribuidores de drogas, con

un examen periódico de sus estrategias nacionales en materia de delincuencia y drogas para asegurar que las respuestas eran apropiadas. Otros Estados Miembros habían adoptado varias medidas: hacer un mejor uso de los recursos de los organismos de seguridad en la lucha contra el tráfico de drogas; crear grupos de tareas mixtos; ampliar sus listas de precursores sometidos a fiscalización nacional; vigilar más de cerca a los fabricantes y las ventas de precursores; establecer alianzas de los sectores público y privado con la industria química; prestar más atención a la producción de estimulantes de tipo anfetamínico; endurecer las medidas de fiscalización de los precursores que transitan por su territorio; participar en operaciones internacionales, como el programa Channel; sensibilizar a los organismos de seguridad respecto a la cambiante dinámica del tráfico de drogas; fortalecer la recopilación de información para preparar operaciones mejor orientadas; negociar acuerdos de cooperación bilaterales con otros Estados Miembros; llegar a acuerdos de cooperación específicos sobre las fronteras compartidas; y centrar más la atención en los organizadores del tráfico de drogas.

27. Las respuestas indicaron que en la mayoría de los Estados Miembros eran las autoridades nacionales o federales de policía y aduanas las encargadas de reducir la oferta de drogas. En uno de cada dos Estados Miembros era un órgano de policía subnacional o no federal el encargado, mientras que las instituciones militares y los organismos nacionales especializados encargados de aplicar la ley en materia de drogas eran los competentes en menos de una tercera parte de los casos. Los Estados Miembros indicaron que contaban con la participación de una amplia variedad de organismos de seguridad en la labor de reducción de la oferta de drogas, incluidos la gendarmería nacional, las fuerzas de seguridad aeroportuarias, los servicios nacionales de seguridad, los organismos de fiscalización de estupefacientes, los organismos de protección marítima y de la marina mercante, los servicios estatales de control de fronteras, los servicios de administración de prisiones y las oficinas de las fiscalías centrales.

28. Más de la mitad de los Estados Miembros que respondieron al cuestionario indicaron que contaban con una entidad que coordinaba las actividades de los organismos encargados de reducir la oferta de drogas. Dichas entidades eran de distintos tipos, y entre ellas había secretarías para la prevención de la drogadicción y el tráfico de drogas, servicios de policía, autoridades nacionales encargadas de la vigilancia de precursores, ministerios de interior o de justicia, oficinas de lucha contra delincuencia organizada, fiscalías, consejos de fiscalización de drogas y lucha contra la drogadicción, oficinas nacionales de inteligencia en materia de drogas, organismos de aplicación de la ley en materia de drogas y comisiones estatales.

29. Según las respuestas recibidas, la mayoría de los Estados Miembros habían adoptado todas las medidas y creado todas las instituciones recomendadas para hacer frente al peligro de corrupción en las fuerzas de seguridad nacionales a las que se había encomendado la reducción de la oferta de drogas, incluidos órganos internos y externos de supervisión; códigos de conducta; la obligación de que el personal de las instituciones señaladas haga una declaración de bienes e informe sobre toda sospecha de casos de corrupción; y la formación sobre ética profesional para dicho personal. Además, algunos Estados habían aprobado legislación especial en materia de justicia penal o de ética, establecido tribunales asociados y nombrado comisarios o fiscales instructores especiales.

30. En la mayoría de los Estados Miembros el ordenamiento jurídico permitía la utilización de técnicas especiales de investigación. Los organismos policiales solían valerse de informantes y utilizar técnicas de vigilancia encubierta para obtener pruebas (en las dos terceras partes de los casos) y, en menor medida, también recurrían a las entregas vigiladas y la vigilancia electrónica. Algunos Estados Miembros indicaron que también empleaban otros métodos, como los testigos anónimos, la protección de testigos, la vigilancia de las operaciones financieras sospechosas, la interceptación de las telecomunicaciones, la vigilancia encubierta o la creación de empresas para captar a grupos de traficantes.

31. Solo una minoría de Estados Miembros disponían de sistemas para vigilar la venta por Internet de preparados farmacéuticos que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas sujetas a fiscalización internacional. Las ventas por Internet las vigilaban autoridades nacionales competentes que hacían cumplir los procedimientos e investigaban supuestos delitos.

Cooperación transfronteriza e internacional

32. Para fomentar la cooperación transfronteriza entre las fuerzas de seguridad de distintos países, la actividad que más realizaron los Estados Miembros fue el intercambio de información (en más de dos terceras partes de los casos), seguida de la participación en operaciones conjuntas con otros países y el intercambio de oficiales de enlace (en casi la mitad de los casos). Algunos Estados Miembros también organizaron visitas de estudio, reuniones operacionales conjuntas, entregas vigiladas, tareas de vigilancia conjunta de fronteras y actividades de capacitación conjuntas. Entre los resultados importantes de esa cooperación cabe destacar operaciones específicas como Channel, la recuperación de grandes cantidades de heroína, cocaína y estimulantes de tipo anfetamínico, una cooperación transfronteriza más estrecha entre los servicios de policía, los servicios de aduanas y las fiscalías en la lucha contra el tráfico de drogas, talleres de expertos para el personal forense, actividades de capacitación interinstitucionales conjuntas, entregas vigiladas mejor ejecutadas y el desmantelamiento de una amplia red de tráfico de estimulantes de tipo anfetamínico.

33. La mayoría de los Estados Miembros indicaron que ningún funcionario judicial o policial había perdido la vida o desaparecido en el curso de operaciones de lucha contra las drogas durante el período objeto de examen. No obstante, 13 Estados Miembros dijeron haber sufrido pérdidas de este tipo.

34. Si bien 25 Estados Miembros indicaron que habían extraditado a otros países a autores de delitos relacionados con drogas en virtud de acuerdos o memorandos de entendimiento bilaterales, regionales o internacionales en vigor, este no fue el caso en la mayoría de los Estados Miembros.

35. El problema más frecuente con que tropezaron los organismos judiciales o policiales en la cooperación con sus homólogos de otros países fue la lentitud de los procedimientos oficiales. Otros problemas importantes fueron la falta de un idioma común de comunicación y la falta de cooperación de los homólogos o falta de intercambio de información, seguido de la ausencia de acuerdos que permitieran la cooperación operacional o la asistencia judicial recíproca, y la imposibilidad de determinar el órgano homólogo al que era preciso dirigirse o con el que se debía

establecer rápidamente comunicación. No obstante, en general la mayoría de los Estados Miembros no comunicaron problemas de este tipo.

36. La inmensa mayoría de los Estados Miembros informaron de que sus fuerzas de seguridad utilizaban las plataformas de comunicación establecidas por medio de una o más de las entidades o los conductos enumerados en el cuestionario para intercambiar información con sus homólogos de otros países. La comunicación directa entre los organismos de represión, las reuniones de alcance regional e internacional y las organizaciones regionales fueron los conductos más utilizados, seguidos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), los oficiales de enlace y los conductos diplomáticos. La Organización Mundial de Aduanas fue utilizada por menos de la mitad de los Estados Miembros que respondieron al cuestionario. Otros conductos fueron la Oficina Europea de Policía (Europol), la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea y la Iniciativa de cooperación en Europa sudoriental.

37. Para hacer frente a los problemas planteados por las nuevas tecnologías (por ejemplo, las computadoras, los teléfonos móviles e Internet) a la hora de combatir el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los Estados Miembros indicaron que las medidas que utilizaban con más frecuencia eran, entre otras, la capacitación concreta para la obtención de pruebas y la concienciación del personal de las fuerzas de seguridad, incluso en lo que respecta a los productos farmacéuticos. Solo una minoría de Estados Miembros habían promulgado leyes específicas.

Cooperación técnica internacional

38. Un número considerable de Estados Miembros informaron de que habían recibido asistencia técnica de otro país o de una organización internacional en la esfera de la reducción de la oferta de drogas. La forma de asistencia más común fue la capacitación, seguida de la comunicación de datos. Menos común fue el suministro de programas informáticos, equipo o asistencia financiera. En lo que respecta a las fuentes de asistencia, las respuestas indicaron que la asistencia de las Naciones Unidas y la asistencia bilateral eran igual de importantes y que los órganos e iniciativas pertinentes de la Unión Europea también eran importantes. Concretamente, prestaron asistencia la UNODC, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Internacional de Asistencia a la Formación en Investigaciones Criminales, el Programa de Actividades Consultivas sobre Drogas del Plan Colombo, la Organización de los Estados Americanos, Europol, Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, así como Alemania, Australia, Austria, el Canadá, China, España, los Estados Unidos de América., la Federación de Rusia, Francia, la India, Italia, Noruega, Polonia, la República de Corea y Tailandia.

39. Casi la mitad de los Estados Miembros que habían recibido asistencia técnica indicaron que esa asistencia había resultado suficiente para satisfacer sus necesidades. En las respuestas también se destacó la necesidad de mejorar la capacidad para elaborar inteligencia, información y análisis pertinentes, así como de recibir enseñanza de idiomas y apoyo para la identificación de drogas sintéticas. También había más necesidad de equipo adecuado, como perros detectores de drogas, equipo de búsqueda, equipo de rayos x, equipo de vigilancia, programas informáticos de análisis financiero y equipo de apoyo de laboratorio.

40. Veintitrés Estados Miembros proporcionaron capacitación en la esfera de la reducción de la oferta de drogas, incluida capacitación forense. Algunos Estados Miembros también proporcionaron otras formas de asistencia técnica, como equipo, asistencia financiera y programas informáticos. Algunos comunicaron sus datos y elaboraron inteligencia operacional. Los destinatarios de esa asistencia fueron principalmente otros países y, en menor medida, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Se prestó asistencia al Afganistán, Belarús, Cabo Verde, Chile, el Ecuador, Georgia, Haití, Honduras, Kazajstán, Kirguistán, México, la República de Moldova, la República Dominicana, Santo Tomé y Príncipe, Tayikistán y Uzbekistán.

Fiscalización de precursores

41. La mayoría de los Estados Miembros informaron de que habían preparado una lista de las empresas nacionales autorizadas para fabricar, distribuir y vender precursores. Algunos Estados Miembros habían adoptado nuevas medidas, en colaboración con las industrias pertinentes, en relación con la oferta y el tráfico de precursores y otras sustancias químicas aún no sujetas a fiscalización internacional. Esas medidas incluían el aumento del número de sustancias químicas sometidas a fiscalización nacional, la elaboración de códigos de conducta para la industria química y directrices sobre la fabricación, venta y gestión de precursores, la firma de memorandos de entendimiento con fabricantes y vendedores de productos químicos, la formulación de previsiones de las necesidades nacionales legítimas de precursores, la preparación de material para el aprendizaje en línea para la industria y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la celebración de seminarios para la industria química y la creación de grupos de trabajo interinstitucionales sobre precursores para preparar mejores medidas de fiscalización de precursores, investigaciones retrospectivas y medidas para alentar la vigilancia voluntaria de las sustancias no sometidas a fiscalización.

42. Un número considerable de Estados Miembros habían adoptado medidas en relación con el uso de sustancias no sometidas a fiscalización internacional y productos químicos sucedáneos para la fabricación de precursores utilizados en la fabricación de heroína, cocaína o estimulantes de tipo anfetamínico. Entre esas medidas figuran los análisis de riesgos relativos a la venta de precursores no regulados; exámenes del comercio legal de sustancias no incluidas en los cuadros de conformidad con la lista de vigilancia voluntaria de sustancias no incluidas en los cuadros de la Unión Europea; exámenes de la legislación nacional para evaluar su eficacia para la fiscalización de sustancias químicas; listas nacionales de vigilancia de sustancias químicas sometidas a fiscalización; medidas de extensión y concienciación para los representantes y fabricantes de la industria química; códigos de conducta voluntarios para la notificación de operaciones sospechosas; la participación en medidas internacionales especiales para la vigilancia de precursores como parte del Proyecto Prisma y el Proyecto Cohesión; y conferencias de grupos de expertos como la Conferencia sobre la Lucha contra el Tráfico de Drogas Sintéticas celebrada en Nunspeet (Países Bajos) en noviembre de 2007, en que se señalaron tendencias, nuevas sustancias químicas y lagunas legislativas.

43. La mayoría de los Estados Miembros indicaron que su marco de fiscalización de precursores incluía un sistema de notificaciones previas a la exportación.

La mayoría de los Estados utilizaban el sistema electrónico de intercambio de notificaciones previas a la exportación (PEN Online) elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Los Estados que no utilizaban el sistema PEN Online indicaron que les resultaba difícil usarlo debido a la lentitud con que respondían las autoridades encargadas de la certificación o que disponían de su propio sistema de fiscalización. Algunos Estados Miembros utilizaban su propio sistema de fiscalización únicamente para vigilar las sustancias químicas importadas. Otros habían iniciado el proceso de inscripción en el sistema PEN Online o necesitaban otros idiomas para poder utilizarlo.

44. La mayoría de los Estados Miembros opinaban que los mecanismos existentes de cooperación internacional para la fiscalización de precursores cumplían cabalmente los requisitos a ese respecto. Se señaló que el sistema PEN Online contaba con muchos suscriptores y que se debería alentar a más países a utilizarlo. Otros Estados Miembros consideraron que las respuestas a las solicitudes presentadas al sistema PEN tardaban demasiado en llegar, lo que hacía imposible que hubiera una fiscalización eficaz. Algunos indicaron que no había suficiente información sobre el comercio internacional y la circulación y las ventas legales de sustancias químicas y precursores. Al no haber requisito de inscripción del usuario final de las remesas de sustancias químicas, seguía habiendo riesgo de desviación.

45. La mayoría de los Estados Miembros indicaron que contaban con sistemas para investigar los precursores después de su incautación. Consideraron que esos sistemas hacían posible rastrear los precursores incautados hasta su origen y realizar operaciones de entrega vigilada de los precursores.

El desarrollo alternativo como estrategia para fiscalizar los cultivos ilícitos

46. Los Estados Miembros más afectados por el cultivo de drogas ilícitas informaron de que contaban con estrategias nacionales de desarrollo alternativo, algunos como plan independiente y otros como parte de un plan de desarrollo económico nacional. Una mayoría informó sobre medidas específicas en materia de género, que consistían principalmente en la enseñanza de actividades remunerativas, como la artesanía, las pequeñas empresas y la creación de cooperativas de mujeres, de conformidad con las estrategias nacionales de desarrollo alternativo. En lo que respecta a la inclusión de componentes relativos a la conservación del medio ambiente, algunos Estados Miembros informaron de que la reforestación y la regeneración de tierras eran componentes fundamentales de sus programas de desarrollo alternativo.

47. Algunos de los países que contaban con una estrategia de desarrollo alternativo informaron de que varios ministerios estaban representados en la entidad coordinadora, principalmente los ministerios de asuntos sociales, educación, interior y justicia. Varios Estados Miembros, incluidos algunos de los directamente afectados por los cultivos ilícitos, informaron de que la participación de los interesados pertinentes en la identificación, preparación, ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de desarrollo alternativo quedaba asegurada gracias a la planificación conjunta de los proyectos entre el gobierno, el sector privado y los

representantes de la comunidad y a la participación de estos en todas las fases de los proyectos.

48. Los Estados Miembros que disponían de una estrategia para ayudar a otros Estados Miembros en su desarrollo alternativo informaron de que prestaban apoyo a programas en países seriamente afectados por los cultivos ilícitos para la fabricación de drogas que ejecutaba la UNODC o se ejecutaban mediante la cooperación bilateral directa. En cuanto a la repercusión de los programas de desarrollo alternativo, la mayoría de los países afectados, así como otros Estados Miembros, informaron de que evaluaban esas intervenciones teniendo en cuenta los indicadores pertinentes y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

49. Algunos Estados informaron de que el acceso a los mercados de los productos de los programas de desarrollo alternativo estaba aumentando, mientras que otros señalaron que en sus países los productos de esos programas iban destinados al mercado nacional.

IV. Lucha contra el blanqueo de dinero y promoción de la cooperación judicial para fortalecer la cooperación internacional

Penalización del blanqueo de dinero

50. La mayoría de los Estados Miembros dijeron tener algún tipo de legislación por la que se tipifica como delito el blanqueo de dinero, y la mayoría de esa legislación tenía en cuenta los requisitos y normas internacionales.

51. De los 74 Estados Miembros encuestados, 58 respondieron a las preguntas de la sección sobre el blanqueo de dinero. De estos, 57 indicaron que el blanqueo de dinero era un delito tipificado y 17 informaron de que habían promulgado legislación nueva durante el ciclo de presentación de informes.

52. Muchos Estados Miembros habían adoptado una serie de medidas preventivas y de represión para combatir las actividades delictivas vinculadas con el tráfico de estupefacientes. De los Estados que respondieron al cuestionario, 37 habían hecho esfuerzos intensivos por combatir el blanqueo de dinero y 23 de estos también habían adoptado más medidas para luchar contra la financiación del terrorismo. Un total de 19, 14 y 7 Estados Miembros, respectivamente, habían adoptado medidas contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas. Estas cifras se solapan dado que, en la mayoría de los casos, cuando un Estado Miembro había adoptado medidas para luchar contra el blanqueo de dinero, también las había adoptado para luchar contra otras actividades delictivas. No obstante, había algunos casos excepcionales en los que los Estados no habían actuado contra el blanqueo de dinero, sino que habían adoptado medidas únicamente contra la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes.

53. Un factor importante para que un país pueda luchar contra el blanqueo de dinero es su capacidad para identificar, incautar y recuperar fondos ilícitos a fin de eliminar el producto de las actividades ilegales. En los últimos años se habían logrado progresos en lo que respecta a la recuperación de activos, pero se disponía de pocos datos mensurables en relación con los decomisos y con la consiguiente

restitución de activos a los presupuestos estatales. Un total de 45 Estados Miembros indicaron que habían adoptado medidas para la gestión de los bienes incautados.

54. Otro componente clave es la capacidad de un país para cooperar eficazmente con sus vecinos y con los asociados regionales e internacionales, pero solo 20 Estados Miembros indicaron que su legislación contra el blanqueo de dinero les permitía concertar acuerdos bilaterales o multilaterales para la comunicación de datos, las extradiciones y la asistencia jurídica recíproca. Ocho de estos Estados Miembros habían adoptado nuevos instrumentos jurídicos durante el período objeto de examen para permitir la concertación de ese tipo de acuerdos.

55. En lo que respecta a mejoras concretas de los regímenes de lucha contra el blanqueo de dinero durante el período que se examina, nueve Estados Miembros informaron de que habían aprobado nuevos instrumentos jurídicos para penalizar el blanqueo de dinero derivado del tráfico de drogas o de otros delitos graves de carácter transnacional. Un total de 15 Estados Miembros indicaron que habían adoptado medidas específicas contra las prácticas de blanqueo de dinero basadas en nuevas tecnologías, como Internet, o nuevos sistemas de transferencia electrónica de dinero. Solo 14 Estados Miembros habían adoptado nuevas medidas jurídicas para la identificación, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto de los delitos relacionados con drogas.

56. Los bancos y las instituciones financieras desempeñan una función clave en la aplicación de las normas y la identificación de actividades financieras sospechosas. En el sector financiero se han adoptado muchos procesos estándar con arreglo a los requisitos internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero. La mayoría de los Estados Miembros que respondieron al cuestionario informaron de que sus bancos e instituciones financieras habían adoptado medidas para regular las actividades financieras cumpliendo los requisitos en materia de verificación de la identidad del cliente, exigiendo la obtención de información sobre los propietarios efectivos, en el caso de las personas jurídicas, llevando registros financieros, obligando a notificar las transacciones sospechosas y estableciendo mecanismos para detectar y vigilar el traslado transfronterizo de dinero en efectivo y títulos negociables al portador. Muchos Estados Miembros también contaban con mecanismos para detectar toda corriente de dinero procedente de las drogas hacia el sistema financiero y con disposiciones de diligencia debida ampliadas en relación con personas de relevancia política a nivel nacional e internacional.

57. Las actividades de los organismos de seguridad encargados de los asuntos de blanqueo de dinero y de las unidades de inteligencia financiera son fundamentales para la aplicación eficaz de los marcos legislativos y de regulación de la lucha contra el blanqueo de dinero. Los Estados Miembros que respondieron al cuestionario indicaron que habían realizado las siguientes actividades de aplicación de la ley: rastreo del producto del delito (35 Estados Miembros), incautación del producto del delito (32), embargo preventivo del producto del delito (31) y decomiso del producto del delito (31).

58. Otro factor de disuasión frente al delito de blanqueo de dinero es que este sea un delito que pueda dar lugar a extradición, de forma que se pueda enjuiciar a los delincuentes en las jurisdicciones en que hayan cometido sus delitos financieros y se garantice que no puedan eludir la acción de la justicia operando en territorios con ordenamientos jurídicos deficientes en lo que respecta al blanqueo de dinero. De los

Estados Miembros que presentaron información, 45 afirmaron que el blanqueo de dinero constituía un delito que podía dar lugar a extradición. De ellos, 26 indicaron que tanto los nacionales como los no nacionales podían ser objeto de extradición, y 15 informaron de que solo los no nacionales podían ser extraditados.

Extradición

59. La cuarta parte de los Estados Miembros que respondieron al cuestionario habían concertado acuerdos o memorandos de entendimiento bilaterales o multilaterales en materia de extradición con un número de países que variaba entre 3 y 74. Un total de 17 Estados Miembros informaron de que habían concertado acuerdos de este tipo durante el período objeto de examen. Las respuestas indicaron que la mitad de los Estados Miembros encuestados no habían concertado ningún acuerdo ni memorando de entendimiento bilateral o multilateral en materia de extradición. Un número considerable de Estados Miembros no proporcionaron ninguna información sobre el número de países con los que colaboraban en este ámbito.

60. En lo que respecta a las medidas adoptadas en cumplimiento de esos acuerdos, 13 Estados Miembros informaron de que entre 1 y 23 países habían participado en medidas de esa índole durante el período objeto de informe. Otros Estados Miembros o bien no proporcionaron o no tenían información al respecto.

Asistencia jurídica recíproca

61. Las respuestas indicaron que más de una cuarta parte de los Estados Miembros que presentaron información habían concertado acuerdos o memorandos de entendimiento bilaterales o multilaterales relativos a la asistencia jurídica recíproca con un número de países que variaba entre 1 y más de 100. Si bien ocho Estados Miembros informaron de que habían concertado acuerdos de esa índole durante el período objeto de examen, más del 40% no lo habían hecho. Un número considerable de Estados Miembros no proporcionaron información alguna sobre el número de países con los que habían firmado acuerdos o memorandos de entendimiento bilaterales o multilaterales en materia de asistencia jurídica recíproca.

62. Las respuestas indicaron que solo el 20% de los Estados Miembros habían adoptado medidas en cumplimiento de esos acuerdos con un número de países que variaba entre 2 y 68. Más del 40% de los Estados Miembros informaron de que no habían cooperado con ningún país en virtud de esos acuerdos durante el período objeto de examen. Otros Estados Miembros o bien no proporcionaron o no tenían información al respecto.

Tráfico ilícito por mar

63. Solo el 15% de los Estados Miembros que presentaron información habían concertado acuerdos o memorandos de entendimiento bilaterales o multilaterales en materia de tráfico ilícito por mar con un número de países que variaba entre 1 y 185. Unos 5 Estados Miembros informaron de que durante el período objeto de examen

habían firmado acuerdos de esa índole con un número de países que variaba entre 1 y 11. Por el contrario, casi el 50% de los Estados Miembros no habían concertado ningún acuerdo ni memorando de entendimiento en materia de tráfico ilícito por mar. Muchos Estados no proporcionaron información alguna sobre el número de países con los que habían firmado tales acuerdos o memorandos de entendimiento.

64. En lo que respecta a las medidas adoptadas en cumplimiento de dichos acuerdos, solo tres Estados Miembros dijeron haber adoptado medidas con un número de países que variaba entre seis y ocho. Casi el 50% de los Estados indicaron que no habían colaborado con otros países en virtud de esos acuerdos durante el período objeto de examen. Otros Estados Miembros o bien no proporcionaron o no tenían información al respecto.

Protección de las víctimas y los testigos

65. Los procedimientos de justicia penal para garantizar la protección de las víctimas y los testigos pueden incluir medidas policiales para aumentar la seguridad física, procedimientos judiciales para garantizar la seguridad de la persona mientras presta declaración y programas de protección de testigos que faciliten servicios más especializados y extraordinarios, como la reubicación y una nueva identidad, como último recurso. Sin embargo, muchos países aún no han establecido políticas, leyes o medidas prácticas para la protección de las víctimas y los testigos, o no han aplicado las leyes vigentes de una manera eficaz, por lo que queda margen de mejora tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.

66. De los 74 Estados Miembros que respondieron al cuestionario, solo 15 dijeron contar con legislación, reglamentos o procedimientos nuevos para la protección de las víctimas y los testigos, mientras que más de 30 no los tenían y el resto no respondió a la pregunta. De los Estados Miembros que respondieron afirmativamente, cuatro presentaron copias de las leyes pertinentes.

V. Recomendaciones

67. A fin de mejorar la calidad de los informes sobre este tema y de que la UNODC pueda analizar las cuestiones conexas con más precisión, todos los Estados Miembros deberían proporcionar a la Oficina una respuesta puntual y completa al cuestionario para los informes anuales. Los Estados Miembros también podrían proporcionar información más detallada, especialmente en lo que respecta a las preguntas 14, 16 y 18 de la parte I del cuestionario.

68. Es preciso que haya una movilización mundial a todos los niveles para aumentar la cobertura de las intervenciones para la prevención del consumo de drogas y la promoción del tratamiento, la atención, la rehabilitación y la reinserción de los drogodependientes, en particular los que pertenecen a grupos en situación de riesgo o se encuentran en instituciones penitenciarias.

69. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de realizar más intervenciones de prevención basadas en datos científicos, así como una mayor labor de vigilancia y evaluación de los resultados y la repercusión de dichas intervenciones.

70. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de aumentar el acceso a servicios de tratamiento, atención, rehabilitación y reinserción de drogodependientes financiados por un seguro o por el gobierno y no por los pacientes, sus familias o la sociedad civil, como se haría para cualquier otro trastorno de la salud.

71. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar medidas complementarias para reducir la oferta ilícita de drogas y hacer frente al tráfico de drogas, tanto a nivel nacional como mediante la cooperación internacional, entre ellas la creación de mecanismos regionales para promover el intercambio de información y las actividades policiales transfronterizas. Los Estados Miembros también deberían considerar la posibilidad de adoptar más medidas para la fiscalización de precursores y de cultivos ilícitos.

72. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de hacer mayores esfuerzos por luchar contra el blanqueo de dinero, entre otras cosas mediante la creación, aplicación y ejecución de regímenes jurídicos y reglamentarios amplios, de conformidad con las normas internacionales, a fin de reprimir las actividades delictivas organizadas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

73. Los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho deberían tratar de concertar los acuerdos u otros arreglos bilaterales o multilaterales que sean aplicables en materia de extradición, asistencia jurídica recíproca y tráfico ilícito por mar con un mayor número de países, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988³, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional⁴ y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción⁵, sobre todo si no conceden la extradición o asistencia jurídica recíproca en ausencia de un tratado o basándose en el principio de reciprocidad.

³ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1582, núm. 27627.

⁴ *Ibid.*, vol. 2225, núm. 39574.

⁵ *Ibid.*, vol. 2349, núm. 42146.